

PLATA Y PLOMO*

El 11 de diciembre de 2006, apenas una semana después de su toma de posesión como presidente mexicano, Felipe Calderón envió a 7.000 soldados y policías al estado occidental de Michoacán para destruir plantaciones de marihuana y en busca de narcotraficantes. Fue éste el primer despliegue de una «guerra contra las drogas» que pronto habría de intensificarse de manera espectacular: al cabo de dos meses, se había enviado un total de 30.000 oficiales de las fuerzas de seguridad a 8 de los 32 estados mexicanos, en su mayoría en el norte del país. Cuatro años más tarde, la guerra de Calderón solamente puede catalogarse como una catástrofe homicida: han perecido una friolera de 40.000 personas, más de 6.000 únicamente en la primera mitad de 2011 —el equivalente a un ritmo de 30 víctimas por día—, y, sin embargo, el flujo de drogas y de armas continúa sin disminuir y la oleada de asesinatos, secuestros y chantajes se ha extendido aún más.

Aunque las estadísticas generales resultan suficientemente sorprendentes, la implacable sucesión de un horror tras otro tiene un gran efecto anestésico. ¿Cómo es posible entender incidentes tales como el descubrimiento esta pasada primavera de 250 cuerpos, en su mayoría de trabajadores inmigrantes centroamericanos, en fosas comunes en Tamaulipas y en Durango; o los cadáveres mutilados que en múltiples ocasiones aparecen colgando de puentes o al borde de carreteras, acompañados de pancartas con mensajes de los asesinos para las autoridades? La narcoviolenencia ha estado presente durante mucho tiempo en México, pero únicamente comenzó a adquirir los niveles patológicos del presente en 2008, un año después de la ofensiva de Calderón, cuando el número de homicidios relacionados con las drogas de repente se multiplicó por dos. Desde entonces, la narcoviolenencia se ha convertido hasta tal punto en una parte fundamental de la realidad mexicana, impregnando el lenguaje y la cultura, que parece resistirse a cualquier análisis. Desde los periódicos a las novelas policíacas, desde las ondas de radio a internet, es una fuente de miedo e ira, o incluso en algunos casos de celebración, pues existen múltiples canciones —llamadas «narcocorridos»— que narran las hazañas de los capos y asesinos como si de héroes populares, al mismo nivel que Villa o Zapata, se tratara.

* Anabel Hernández, *Los señores del narco*, México, Grijalbo, 2010, 588 pp.

La guerra contra las drogas mexicana también ha generado un creciente número de publicaciones que tratan de describir el actual desastre. Tanto dentro como fuera del país, predominan los análisis periodísticos, la calidad de los cuales tiende a variar: algunos son superficiales y sensacionalistas –puede que *The Last Narco* (2010), de Malcolm Beith, sea el principal culpable–, mientras que otros están teñidos de un lirismo engreído, como sucede en los múltiples libros de Charles Bowden sobre Ciudad Juárez («el miedo ha sido mi pálido jinete», escribe en *Ciudad del Crimen*, 2010). Existe, a su vez, algún que otro reportaje decente. En inglés, *Amexica*, de Ed Vulliamy (2010), se centra principalmente en el área de la frontera. En español, reporteros como Héctor de Mauleón (*Marca de sangre*, 2010) o Julio Scherer García (*Historias de muerte y corrupción*, 2011), entre otros, han investigado detenidamente las figuras y acontecimientos claves de la última década, más o menos; mientras que *El México narco* (2009), que compila artículos del equipo de la revista *Proceso*, ofrece un retrato de la lacra que afecta al país en cada uno de los estados. No obstante, la mayoría de estos escritores han tendido a quedarse en la superficie de los acontecimientos, en el mejor de los casos para destacar la compleja red de alianzas y traiciones entre los distintos cárteles. Generalmente, las descripciones circunstanciales ocupan el lugar que deberían tener los análisis de las profundas estructuras que han generado el tráfico de drogas en México y que han hecho posible su expansión. Sobre todo, a pesar de que la bibliografía existente sobre el tema ocasionalmente mencione la corrupción, ésta aparece como un detalle secundario, en lugar de como un factor sistémico y posibilitador. Muchos de los libros actualmente disponibles sobre la materia evitan examinar de cerca, y muchísimo más atacar, a los políticos, policías, banqueros y hombres de negocios «legales» que han posibilitado el ascenso de los narcos.

Los señores del narco, de Anabel Hernández, resulta muy llamativo sobre este telón de fondo. Su autora es una de las más conocidas periodistas de investigación de México. Nacida en Ciudad de México en 1972, Hernández comenzó su carrera de reportera en 1993, en el recientemente fundado periódico liberal *La Reforma*. Desde mediados de la década de 1990 ha escrito para otros dos importantes diarios –*Milenio* y *El Universal*– antes de pasarse, en 2006, al nuevo proyecto digital *Reporte Índigo*. Adquirió fama en el ámbito nacional en 2001, con la revelación del faraónico gasto doméstico del palacio presidencial, Los Pinos; el escándalo recibió el nombre de «Towelgate», y produjo la caída de varios miembros del equipo presidencial. Sus tres libros, aparte del presente, hasta la fecha –*La familia presidencial* (2005), *Fin de fiesta en Los Pinos* (2006) y *Los cómplices del presidente* (2008)– también se han centrado en la corrupción en la cúspide del poder, tanto bajo el mandato de Fox como bajo el de Calderón.

Producto de cinco años de trabajo de investigación, *Los señores del narco* posee un enfoque más amplio, y trata no sólo la guerra de Calderón, sino también su larga historia previa. A lo largo del libro, Hernández hace hincapié en la complicidad de las autoridades y de la elite empresarial del país. Su título resume su argumento fundamental: los señores de la droga de México

no habrían «llegado demasiado lejos sin el contubernio de empresarios, políticos y policías, esas personas que todos los días ejercen el poder desde un falso halo de legalidad [...] Todos ellos son *los señores del narco*». A cada paso, Hernández da nombres –no sólo de los narcos y de sus cómplices más cercanos, sino también de políticos, policías, funcionarios, jueces y empresarios que han colaborado con ellos–. El libro está abundantemente documentado y se surte de fuentes cuidadosamente escogidas; el texto incluye reproducciones de páginas de documentos oficiales pertenecientes tanto a las autoridades mexicanas como a las estadounidenses, así como declaraciones de testigos de muchos informantes clave. La pura acumulación de detalles, combinada con una cronología serpenteante, puede resultar desconcertante a veces; escandalosamente, los editores, una casa perteneciente a Random House Mondadori, no han creído conveniente dotar al libro de un índice de materias, ni siquiera tras siete reimpressiones.

Los señores del narco ha causado, sin duda, un gran impacto en México, llegando a vender más de 50.000 ejemplares. Más alarmantemente, su autora ha, supuestamente, recibido amenazas de muerte –por parte de, tal como ella denuncia, Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón y principal dirigente de la guerra contra las drogas–. García Luna ronda los cuarenta y cinco años de edad y ha pasado la mayor parte de su carrera dentro del servicio de inteligencia de este país, el CISEN; en el libro se le describe como un gran cómplice del cártel de Sinaloa. En opinión de Hernández, la guerra contra las drogas es una farsa en su totalidad, una cortina de humo militarizada tras la que el gobierno potencia continuamente los intereses de un cártel a expensas de los otros. El panorama que pinta el libro, por lo tanto, resulta todavía más funesto que el que sugieren las crudas estadísticas: la guerra contra las drogas no es simplemente un inútil baño de sangre, sino que se trata de un colosal y cínico engaño.

Hace más de cien años, el dictador Porfirio Díaz pronunció su famosa frase: «¡Pobre México! Tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos». La frase resulta especialmente adecuada en el ámbito de las drogas, pues es el consumo masivo de Estados Unidos lo que ha hecho de México un territorio tan importante y valioso, y sobre todo su frontera norte, de más de 3.000 km de longitud. Las ciudades fronterizas, como Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y Matamoros, simbólicamente unidas a sus homólogas en la parte estadounidense –San Diego, El Paso, Laredo y Brownsville–, han sido desde antiguo las rutas de múltiples tipos de contrabando. Estos pasos fronterizos son las «plazas» o territorios decisivos para el tráfico de drogas. Pero en múltiples sentidos las raíces de los narcos se encuentran un poco más al sur, en una zona escasamente poblada y montañosa que se extiende por los tres estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa, conocida como el «triángulo de oro». Fue aquí en donde, en el siglo XIX, los granjeros mexicanos comenzaron a cultivar adormideras traídas de China; a mediados del siglo XX, la mayoría del campesinado local había comenzado a cultivar la adormidera y la marihuana junto a las exiguas cosechas que apenas les bastaban para alimentarse. En México, al igual que en el resto del mundo, la produc-

ción de droga y la pobreza rural están estrechamente interconectadas. Es de este severo medio rural de donde surgieron la mayoría de los capos de la droga del presente, primero trabajando en el campo de niños –no había ninguna escuela en un radio de kilómetros– y más tarde acompañando a sus padres al mercado, antes de dedicarse finalmente al oficio trabajando en eslabones superiores de la cadena. Hernández observa que en la Sierra Madre Occidental la situación ha cambiado muy poco desde la juventud de los narcos de hoy en día.

Hernández resume las distintas fases a través de las cuales ha ido avanzando el tráfico de drogas mexicano desde mediados del siglo xx. En las décadas de 1960 y de 1970 existía un sistema no oficial en el cual los distribuidores de drogas –todavía no existían los cárteles como tales– trabajaban «plazas» acordadas de antemano con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) gobernante, a cambio de un porcentaje de los beneficios. De acuerdo con las fuentes de Hernández, maletas llenas de dólares ascendían por la jerarquía gubernamental, hasta los Ministerios del Interior y de Defensa y el despacho de la Procuraduría General. El negocio se limitaba a la heroína y a la marihuana; y se suponía que ninguna parte de la producción se quedaba en el país. No obstante, el sistema prevaleciente durante los presidentes Díaz Ordaz (1964-1970), Echeverría (1970-1976) y López Portillo (1976-1982) habría de sufrir una profunda mutación durante la década de 1980. La principal causa fue geopolítica: como parte del intento de Estados Unidos de derribar la Revolución sandinista, la CIA empleó la venta de estupefacientes para financiar y armar a la Contra. Siguiendo los pasos de escritores residentes en Estados Unidos como Gary Webb, Alexander Cockburn o Jeffrey St Clair, Hernández cuenta cómo la CIA puso en contacto a los distribuidores de drogas con los proveedores colombianos para enviar armas hacia el sur y cocaína hacia el norte. (Muchas remesas se entregaban en la base aérea de Mena, en Arkansas; en aquel momento, el gobernador de ese estado era William J. Clinton.) Por lo tanto, escribe Hernández, «dos grupos de narcotraficantes separados por la geografía y la historia se fundieron gracias a la CIA en una alianza que perdura hasta ahora».

Mientras la CIA respaldaba encubiertamente el narcotráfico en México, otros organismos estadounidenses adoptaban un papel más disciplinario. La Drug Enforcement Administration (DEA), creada por Nixon en 1973, ha sido la mayor fuerza que presiona para conseguir la extradición de determinados traficantes –un suceso que supone el fin de la carrera profesional para cualquier narco–. De ahí el sabio refrán común entre ellos, citado por Hernández: «Los gringos te hacen y los gringos te deshacen». A mediados de la década de 1970, la DEA promovió campañas de fumigación con sustancias químicas en el norte de México, que se desarrollaron en paralelo a la «Operación Cóndor» de Echeverría, dirigida no contra los líderes del narcotráfico, sino contra los campesinos cultivadores –cientos de ellos fueron arrestados y torturados y pueblos enteros quedaron vacíos–. Aparte de contaminar el suelo, la fumigación, más que reducirlo, empujó el cultivo de la marihuana y del opio hacia el sur; desde ese momento, los pobres, predominantemen-

te campesinos indígenas de los estados de Michoacán y Guerrero, en el suroeste del país, constituyeron una parte fundamental de la base agraria del narcotráfico. Los principales traficantes de México –prácticamente en su totalidad procedentes de Sinaloa– también se desplazaron hacia el sur, al estado de Jalisco. En la década de 1980, mientras tanto, la Guarda Costera de Estados Unidos incrementaba sus esfuerzos en el Caribe para interceptar alijos, restringiendo las líneas de suministro de los cárteles colombianos, y, por lo tanto, haciendo más atractiva la ruta por tierra a través de México.

La cocaína colombiana aumentó espectacularmente el volumen de los beneficios disponibles para los narcos mexicanos. También crecieron los pagos «tributarios» a los funcionarios del gobierno y el sistema se volvió más sofisticado, sobornando a políticos y funcionarios específicos; la corrupción de las fuerzas del orden resultó más fácil gracias a su fragmentación, puesto que, aparte de la existencia de un cuerpo nacional, cada uno de los 32 estados y de las 2.400 municipalidades del país cuenta con su propia fuerza policial. La propagación de la influencia de los narcos en cierto modo debilitó el anuncio del presidente De la Madrid, en 1982, durante su toma de posesión, de llevar a cabo una «renovación moral». A estas alturas ya se había formado el primer cártel del país, con su base de operaciones en Guadalajara, la segunda ciudad más importante de México. La mayor parte de los principales cárteles que se encuentran en activo en la actualidad descienden de este primer cártel; el cártel de Sinaloa es su sucesor, y los otros son el resultado o bien de las concesiones territoriales que éste les hizo a finales de la década de 1989 –como sucede con el de Juárez, el de Tijuana y el del Golfo–, o bien de los más recientes enfrentamientos internos: el cártel de Beltrán Leyva, por ejemplo, se separó del cártel de Sinaloa en 2008.

Hasta los primeros años de la década de 1990, se mantuvo una cierta paz entre estos distintos grupos, todos ellos amparados por las instituciones. La corrupción institucional había alcanzado nuevos niveles récord con Salinas, quien, en calidad de presidente, entre 1988 y 1994 llevó a cabo uno de los programas de privatización neoliberal más rápidos y amplios de América Latina. Fue éste un periodo en el que la elite mexicana amasó progresivamente fortunas de mayor tamaño, cada vez con un menor reparo hacia el concepto de legalidad. En medio de esta orgía de enriquecimiento, resultaba mucho más difícil de lo normal calcular las dimensiones exactas de la aportación del narcotráfico. Los crímenes del presidente y de su séquito resultaban tan desmesurados que salieron a la luz poco después de que finalizara su mandato, obligando a Salinas a salir del país y a exiliarse en Irlanda. En 1995 el hermano de Salinas, Raúl, entró en prisión acusado de asesinato; había guardado por lo menos 100 millones de dólares en cuentas bancarias suizas –supuestamente pagos del cártel del Golfo– con la ayuda de Citibank. Existen sólidos indicios de que los capos de la droga, y posiblemente también los propios hermanos Salinas, estuvieran detrás del asesinato del candidato presidencial del PRI Luis Donaldo Colosio en Tijuana, en 1994, después de que éste hubiera prometido erradicar la corrupción.

El legado más notorio de Salinas fue, no obstante, el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que entró en vigor a comienzos de 1994, marcó el comienzo de otra nueva fase en el narcotráfico mexicano. En primer lugar, el acuerdo significó un enorme aumento del tráfico rodado a través de las fronteras –por ejemplo, en la actualidad cruzan cada día la frontera por Tijuana 65.000 coches–, multiplicando las oportunidades para el contrabando. Consecuentemente, aumentó el valor de las plazas fronterizas para los cárteles, lo cual generó un motivo de peso para las futuras luchas internas por su control. En segundo lugar, la apertura de numerosas maquiladoras, plantas de montaje para la reexportación de bienes al mercado estadounidense, provocó un crecimiento demográfico en los estados de la frontera mexicana, creando de este modo una bolsa de mano de obra barata que, en caso de cualquier retroceso o contracción del mercado, se vería abocada a las calles en busca de sustento; lo cual ha supuesto un copioso suministro de soldados de a pie para los cárteles. Un tercer acontecimiento a mediados de la década de 1990 habría de tener importantes consecuencias más adelante: el jefe del cártel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes, comenzó a exigir que los colombianos le pagaran en especie además de en efectivo. Hasta este momento, los narcos mexicanos meramente transportaban la cocaína a Estados Unidos. Ahora empezaban a venderla, usando su cercanía al mercado estadounidense para asegurarse un porcentaje de los beneficios mucho mayor. Sucedió también en este momento que el gobierno mexicano comenzó a adoptar una estrategia militar frente al narcotráfico: Zedillo, el sucesor de Salinas, aumentó el presupuesto y las responsabilidades del Ejército en este ámbito, colocando al general Jesús Gutiérrez Rebollo a cargo de la política antidroga. No significó este acontecimiento el final de la connivencia oficial: en enero de 1997 Gutiérrez Rebollo viajó a Washington, en donde el jefe de la política antidroga estadounidense lo elogió diciendo que era «un hombre honesto y un jefe de operaciones firme y eficiente»; antes de que pasara una semana fue arrestado por haber aceptado más de un millón de dólares en sobornos del cártel de Juárez.

El año 2000 trajo consigo el fin de siete décadas de mandato del PRI: el sistema corporativista autoritario puesto en marcha tras la Revolución, después de haber pasado por una fase desarrollista en el periodo de posguerra, seguida por unas crisis de endeudamiento vertiginoso y posteriormente por una reestructuración neoliberal, sufrió una grave pérdida de legitimidad a nivel nacional. Sin embargo, el partido conservó sus bases clientelares y el gobierno de varios estados, y muchos de los deshonestos mecanismos del «antiguo régimen» continuaron funcionando incluso durante el periodo en que el gobierno de la nación estuvo en manos de los partidos de la oposición, esto es, del partido católico de centroderecha PAN y del PRD, de centroizquierda. En lo referente al narcotráfico, el advenimiento de una política de varios partidos trajo consigo un cambio de etiquetas y alianzas, pero ninguna amenaza a su funcionamiento.

En opinión de Hernández, la presidencia de Fox marcó el comienzo de la supremacía del cártel de Sinaloa. Hernández afirma que los vínculos exis-

tentes entre el cártel y el presidente se remontan a los primeros años de la década de 1990, cuando Fox era el gobernador del estado de Guanajuato. Ella denuncia que en 2001 Fox recibió un soborno de 40 millones de dólares de manos de los socios de Joaquín *El Chapo* Guzmán Loera, con el propósito de facilitar la fuga de Guzmán del penal de alta seguridad de Puente Grande, Jalisco, ese mismo año. (De acuerdo con la leyenda repetida por la mayor parte de los periodistas, Guzmán se escapó escondido en un carro de transporte de la ropa sucia; Hernández reconstruye el incidente concienzudamente y concluye que *El Chapo* caminó a plena vista, vestido con un uniforme de policía.) Los funcionarios del gobierno armaron un gran alboroto público con la persecución de Guzmán, pero convenientemente le perdían de continuo la pista; diez años más tarde continúa huido de la justicia. Mientras tanto, las fortunas de Guzmán han crecido a expensas de sus rivales: en 2002, el cártel de Tijuana quedó prácticamente disuelto tras la muerte o la detención de sus cabecillas, los hermanos Arellano Félix; en 2003, el jefe del cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, fue capturado. La DEA, mientras tanto, había abierto una investigación contra el presidente y su familia.

El sexenio de Fox también contempló la emergencia de dos nuevos contendientes dentro del panorama del narcotráfico mexicano, cuyos métodos generaron un cambio en la naturaleza y en la cantidad de la violencia. *La Familia*, basada en Michoacán, baluarte electoral del PRD, combina carnicerías escalofrantes –sus miembros anunciaron su presencia en 2006 haciendo rodar cinco cabezas cortadas por la pista de baile de una discoteca de Uruapán– con un objetivo moralizante: sus asesinatos están acompañados de pancartas que preconizan las virtudes de la familia y de la cohesión social, expresándose en un lenguaje casi religioso. Los Zetas resultan aún más peligrosos. Su núcleo originario se conforma de exsoldados de las fuerzas especiales, muchos de los cuales fueron entrenados en contrainsurgencia en Estados Unidos durante la década de 1990, como parte de una nueva formación de paracaidistas creada con el objetivo de reprimir a los zapatistas. Contratados en un primer momento para encargarse de la seguridad del cártel del Golfo en los albores del siglo xxi, los Zetas han evolucionado desde entonces hasta convertirse en una poderosa organización de tráfico de drogas por derecho propio, operando principalmente en los estados de la costa este del país (prácticamente todos ellos gobernados de manera continuada por el PRI desde el fin de su ininterrumpida ocupación del sillón presidencial en 2000). No obstante, están presentes en la mayoría de los estados mexicanos y poseen bases en Guatemala, en donde han reclutado *kaibiles*, comandos herederos de los escuadrones de la muerte de la Guerra Fría. En cierto sentido, podría decirse que los Zetas serían el equivalente mesoamericano al efecto bumerán imperial en el Hindu Kush, cuando los islamistas financiados por Estados Unidos durante la Guerra Fría se volvieron contra sus antiguos financiadores; la diferencia radicaría en que en México las tropas estadounidenses no son el objetivo, sino los soldados y civiles del subcontratista local del imperio.

Calderón se aseguró la presidencia en 2006 gracias a un fraude a gran escala: se contaron dos veces muchos de sus votos, las papeletas de su oponente se tiraron a la basura, se alteraron recuentos precintados, hasta que el Instituto Federal Electoral produjo el resultado deseado: la victoria de Calderón con una ventaja del 0,58 por 100. El fraude provocó inmensas protestas callejeras de los partidarios de su oponente, Andrés Manuel López Obrador, que hasta la fecha se autoproclama el «presidente legítimo». A pesar de que Calderón carecía, por lo tanto, de legitimidad desde el comienzo, rápidamente acabó con toda idea de que pudiera intentar reforzar su cargo buscando el consenso. En cambio, se apresuró a militarizar la situación, movilizándolo a miles de soldados para librar su «guerra contra las drogas». Hernández describe la cruzada de Calderón como «un teatro donde *nada de lo que parece es*». En el norte del país, el Ejército se ha trasladado a sucesivas ciudades para «recuperarlas» del poder de los narcos. Al parecer, el epicentro de la lucha ha ido desplazándose de una ciudad a otra —de Tijuana a Ciudad Juárez y de Ciudad Juárez a Monterrey—, pero las cifras de homicidios se mantienen increíblemente altas en cada una de ellas; solamente Ciudad Juárez acapara prácticamente el 20 por 100 del total nacional durante los últimos cuatro años. Las muertes violentas se concentran en el norte y en Guerrero y Michoacán, en la costa del Pacífico, pero otras zonas del país han comenzado a incrementar sus aportaciones al macabro total nacional. No obstante, la capital, famosa fuera de México por sus altos niveles de crimen y de secuestros, se encuentra en relativa calma —en parte debido a que el Distrito Federal, a diferencia del resto del país, posee una única, y bien financiada, fuerza policial, que hace que el mantenimiento de la ley y el orden resulte menos fragmentado, esté mejor pagado y sea más visible en sus calles que en ningún otro lugar—. Sin embargo, a pesar de estas terribles cifras, la guerra contra el narcotráfico ha causado poco daño en el cártel de Sinaloa; Hernández observa que de 53.174 detenciones hasta febrero de 2010, solamente 941 afectaban a sus integrantes. La guerra de Calderón ha sido dirigida, en palabras de Hernández, «no contra los “narcotraficantes” en general, sino contra los “narcotraficantes” que son enemigos de *El Chapo*».

En 2008, tuvo lugar una escisión en el cártel de Sinaloa cuando uno de sus personajes más importantes, Alfredo Beltrán Leyva, fue arrestado, y al que, al parecer, Guzmán había delatado a las autoridades. Esto causó una violenta conmoción en el panorama del narcotráfico, ya que se modificaron las alianzas y se sucedieron las represalias. «El quiebre en el grupo que durante los últimos siete años había sido protegido por las principales instituciones federales de seguridad y justicia», escribe Hernández, «provocó otro quiebre igual de violento en el interior de esas dependencias». Funcionarios en todos los ámbitos —federal, estatal y municipal— tuvieron que negociar con uno de los dos bandos que se habían formado en ese momento. Mientras tanto, el país en su totalidad sufrió las consecuencias: un recrudecimiento de la violencia que eclipsó todo lo sucedido anteriormente, a medida que la lucha por el control de las *plazas* se intensificaba todavía más.

La complicidad de las autoridades es el tema dominante en el libro de Hernández: la corrupción estructural que posibilita la existencia de los narcos. Ella ofrece varios indicios sobre cómo y a través de quién se aseguró el cártel de Sinaloa el apoyo estatal. Se centra, en particular, en Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública y figura clave del gabinete de Calderón, y en su dilatada carrera de complicidad con elementos corruptos y criminales dentro de las fuerzas policiales; un grupo protegido por él, por ejemplo, dirigía una banda de secuestradores muy lucrativa en la delegación de Iztapalapa, en Ciudad de México, en la década de 1990. García Luna también ha ido haciéndose inexplicablemente rico a medida que ascendía en el escalafón estatal, con una cartera de propiedades y de restaurantes en la capital y en el estado de Morelos que jamás podría haber adquirido con su salario. La participación de las autoridades en el narcotráfico resulta patente, también, en el uso que los sinaloenses hacen del aeropuerto internacional de Ciudad de México como punto de reexpedición de la droga, y que Hernández investiga con convincente detalle.

No resulta nada exagerado que al final del libro Hernández describa México como una «narcocracia», tal es el punto hasta el cual los intereses del narcotráfico penetran en el poder estatal. Pues resulta un tanto misterioso que el tráfico de drogas se haya convertido en un asunto tan central para una clase política que ya ha tenido tantas oportunidades de enriquecerse de manera ilegal. Parte de la explicación se encuentra en la mera cantidad: las crecientes sumas de dinero manejadas por el mundo del narcotráfico hicieron de éste un imán para los apetitos de las elites. Es probable que especialmente éste fuera el caso después del impulso privatizador de Salinas, que generó una relativa contracción del Estado corporativista y que, consecuentemente, requería una diversificación en las formas de patrocinio y soborno. Otro aspecto digno de consideración lo constituye la naturaleza escalar de la propia corrupción. Las retribuciones de aquellos en la nómina de los narcos varían dependiendo de la utilidad y del rango de sus receptores (según las pruebas que Hernández reproduce, existe incluso una jerarquía de monedas: algunas se pagan en dólares, otras en pesos). Cualquiera participe de este sistema sabe cuánto perciben los que están por encima y los que están por debajo de él, y, por lo tanto, cuánto le corresponde; y también sabe que coger ese dinero no supone ningún obstáculo para el avance de su carrera profesional —en todo caso, lo contrario—. Desgraciadamente, pocos han demostrado estar dispuestos a dejar este recurso sin explotar. Es más, la corrupción está tan generalizada que políticos, policías y funcionarios estatales pueden estar impunemente en la nómina de los narcos, puesto que prácticamente no existe nadie que esté en posición de denunciarlos.

Junto a la connivencia oficial, un segundo tema destacado en *Los señores del narco* es la unión inextricable del negocio del narcotráfico con el resto de la economía; ya que los narcos poseen activos e inversiones en prácticamente todos los sectores, en bancos, en supermercados, en restaurantes, en bienes inmuebles, etc., que no sólo sirven para lavar el dinero proveniente del narcotráfico, sino también como medios a través de los cuales

pueden gradualmente legalizar su patrimonio. Varios observadores han señalado un afán de legitimación —quizá más evidente en el hecho de que los narcos de la segunda generación, a diferencia de sus padres, han estudiado en las universidades de elite mexicanas y tienen el mismo aspecto y se visten de la misma manera que cualquier otro integrante de la minoría rica—. Si el objetivo de los narcos consiste finalmente en resultar indistinguibles del resto de la elite, en el ámbito de las finanzas la fusión ya ha tenido lugar. En opinión de Hernández, «la coraza de acero que blindada los negocios del narcotráfico está constituida justamente por las redes urdidas con los empresarios, no con empresarios pequeños, sino con aquellos que han desarrollado grandes consorcios». Es este camuflaje financiero lo que en última instancia posibilita la continuada existencia de los cárteles. Hernández escribe sobre la necesidad de rechazar la opción que los narcos le ofrecen al país de elegir entre el dinero o la bala —su «invivable ley de plata o plomo», aunque su libro es una prueba en sí mismo de que la *plata* y el *plomo* no constituyen alternativas, sino que se trata de constantes e interdependientes compañeros de viaje.

En el momento presente la situación en México parece desesperada. La noroesteña ciudad industrial de Monterrey, por ejemplo, se encuentra bajo una virtual ocupación militar, con toques de queda, puestos de control y un constante flujo de víctimas. Los residentes, según se informa, se esconden en sus casas en medio de combates con armas de fuego a gran escala entre el ejército y las fuerzas paramilitares de los narcos; los negocios pagan sistemáticamente a un cártel u otro a cambio de protección, a medida que los narcos expanden su catálogo de actividades. El consumo de drogas en México también ha aumentado significativamente en los años recientes; por ejemplo, según datos oficiales, el número de consumidores de cocaína se ha multiplicado por dos entre 2002 y 2008. Esto se debe en parte al estancamiento de la demanda de cocaína en Estados Unidos —en donde se ha visto en cierto modo desplazada por la metanfetamina y otras drogas de laboratorio— y en parte también a que los cárteles han buscado de manera activa incrementar las ventas a nivel nacional. Cuanto más crecen estas ventas, más se convierte el mercado de drogas mexicano, en lugar de las rutas de entrada en Estados Unidos, en el objetivo de las luchas entre los cárteles. Mientras tanto el alcance de los narcos se amplía todavía más, avanzando por América Central, reserva de mano de obra y nuevo campo de batalla de la guerra de las drogas. Países como Guatemala, El Salvador u Honduras, muchísimo más pobres que México, se encuentran todavía en una situación de mayor debilidad en relación al poderío militar y financiero de los narcos. En 2009, las autoridades estadounidenses estimaron que los traficantes mexicanos y colombianos habían ganado entre 18.000 y 39.000 millones de dólares provenientes de las ventas de droga en Estados Unidos; estas cifras resultan, respectivamente, apenas ligeramente inferiores al total del producto interior bruto de El Salvador y Guatemala.

La clase política de México, en los mejores casos, permanece inmóvil ante la continuada tragedia que sacude al país, y, en los peores, es profundamen-

te cómplice de ella. Pero en los últimos meses ha surgido un movimiento de masas de ciudadanos que protestan contra la situación, bajo el lema «Estamos hasta la madre». Se han celebrado enormes manifestaciones por todo el país –la que tuvo lugar en el Zócalo de Ciudad de México en mayo de 2010 convocó a 200.000 personas–, reclamando un cambio de política. A principios de junio de 2011 el movimiento formó una «Caravana por la Paz» con miles de personas y que se extendió desde Cuernavaca a Ciudad Juárez y a otras ciudades del norte; más adelante, durante ese mismo mes, consiguió tener un encuentro público con el presidente, en donde se le instó a poner fin a la guerra contra las drogas. Calderón escuchó y posteriormente insistió con calma en que se ceñiría a su estrategia en curso, aparentemente indiferente ante la avalancha de muertes que tal decisión implicaba de manera inevitable. El veredicto de Hernández sobre esta presidencia es conciso pero emotivo: «Su mandato quedará grabado en la memoria colectiva y en las hermerotecas como el sexenio de la muerte y la corrupción».

El mero hecho de que el gobierno de Calderón esté delimitado a un mandato de seis años por la Constitución hace que esta intransigencia resulte más chocante. ¿Por qué continuar con una política tan funesta, con los costes que ésta acarrea para su popularidad, cuando no se enfrenta a una reelección? Lo que Hernández describe como su apoyo *de facto* al cártel de Sinaloa es probablemente el resultado de una convergencia de la corrupción con una estrategia equivocada, más que exclusivamente del primer factor. Los comunicados del gobierno hablan de una política de desarticulación de cárteles, consistente en fragmentarlos de manera que ya no planteen una amenaza para la ley y el orden (esto es, del monopolio de la violencia por parte del Estado). Pero dado el historial de detenciones y de despliegues militares, parece que la política prevaleciente es la de disolver todos los otros cárteles para que los sinaloenses se conviertan en los dueños de todo el territorio. Quizá esto se fundamente en que en los tiempos del PRI, cuando solamente existía un cártel, el sistema era manejable y la violencia estaba contenida; por lo tanto, lo que México necesitaría hoy en día es volver a aquella situación. Esta aparentemente racional propuesta cae, no obstante, por su propio peso. El auge de los narcos es a la vez el producto y la causa de las transformaciones estructurales que hacen que sea imposible retornar a la situación previa (dejando a un lado la cuestión de si tal cosa podría siquiera ser deseable). Mientras tanto, por supuesto, la política actual resulta también muy lucrativa para aquellos que están en la nómina del cártel de Sinaloa.

Muchos en México observan ahora con ansiedad la historia de Colombia, preguntándose qué estadio de la trayectoria de ese país ha alcanzado México ahora y qué se puede aprender de ello. La comparación da, ciertamente, que pensar: en un punto de su historia el índice de asesinatos a nivel nacional alcanzó en Colombia la cifra del 60 por 100.000, llegando hasta 500 en algunas municipalidades; el de México se encuentra en la actualidad en un 18 por 100.000. No obstante, la comparación se basa en supuestos peligrosamente falsos. El primero de ellos es la idea de que los dos países padecen un problema similar y genérico de «inseguridad». Esto sirve para ta-

par las historias específicas, y los conflictos particulares, de cada uno de ellos. El auge de los señores de la droga colombianos tuvo lugar dentro de una más dilatada guerra civil *de facto* que enfrentó al Estado y a los paramilitares derechistas contra diversas guerrillas de izquierdas. Estaban en juego cuestiones sobre la propiedad y el poder de la clase terrateniente, sin resolver en medio de la fragmentación de la autoridad del Estado que ha caracterizado a este país durante la mayor parte de su historia. La crisis de México es el resultado de una trayectoria diferente, en la que el sistema político se ha corrompido a sí mismo desde dentro, mientras que, a la vez, llevaba a cabo un giro neoliberal que transfería el poder efectivo al más alto poder. En Colombia la autoridad del Estado ha sido combatida casi permanentemente; en México, al igual que con todo lo demás, se ha privatizado paulatinamente.

La segunda asunción peligrosa que se encuentra tras las comparaciones con el caso colombiano es la idea dominante de que, aunque la situación en ese país fue ciertamente mala durante las décadas de 1980 y de 1990, el país se ha «enfrentado» a sus problemas desde entonces gracias a la firme mano de Álvaro Uribe; y, consecuentemente, Colombia constituye en cierto modo un ejemplo para México. Estados Unidos, obviamente, piensa de igual manera: tras suministrar cerca de 7.000 millones de dólares en ayuda militar a Colombia durante la pasada década, Washington está incrementando en este momento sus aportaciones a México; los desembolsos realizados a través de la Iniciativa Mérida se multiplicaron casi por diez de 2007 a 2008, pasando de 56 millones de dólares a 437 millones, aunque las sumas hayan decrecido ligeramente con la crisis. Pero la avalancha de armamento y ayuda para el ejército y la policía colombianos generada por el Plan Colombia no tuvo apenas ningún efecto perceptible sobre la producción de coca; el principal objetivo del Plan consistía, más bien, en la eliminación de los insurgentes de izquierda, que habían perdido terreno, mientras que sus contrincentes paramilitares habían sido «amnistiados» por el sistema que los había apoyado en todo momento. Los cárteles de Medellín y Cali, tan poderosos en su día, habían sido desarticulados; pero otros, vinculados a la organización paramilitar AUC, habían ocupado el lugar de los anteriores dentro de Colombia. Por otra parte, cualquier disminución del poder de los capos de la droga colombianos se ha visto sin duda compensada, si es que no ha estado causada, por el auge de sus homónimos mexicanos: en 1990, según datos de Estados Unidos, México era el responsable de en torno a la mitad de la cocaína introducida en Estados Unidos; la cifra en la actualidad asciende a cerca del 90 por 100.

En la actualidad, Washington reconoce que la demanda estadounidense constituye el invariable factor tras el poder de los señores de la droga, tanto ahora en México como anteriormente en Colombia. Además de ser el principal mercado de drogas, Estados Unidos continúa siendo una generosa fuente de armamento para todos los combatientes de la guerra de las drogas mexicana. Según un reciente informe realizado por tres senadores estadounidenses, es posible determinar directamente que el origen del 70 por 100

de las armas incautadas en México durante los últimos dos años se encuentra en Estados Unidos; muchas de estas armas se compran de manera perfectamente legal en los miles de tiendas al norte de la frontera. Sin embargo, existen muy pocas probabilidades de que vaya a tener lugar ningún cambio en la política en cuanto a drogas, la actitud de la sociedad a este respecto o las leyes sobre la tenencia de armas al norte de la frontera que sea lo suficientemente significativo como para poner freno a los ingresos y a los recursos de los narcos, y, con ellos, a su control de la elite política y empresarial de México. Puede que un levantamiento de una magnitud mucho mayor, del tipo del que se deshizo del viejo régimen oligárquico tras 1910, sea necesario para alterar los parámetros del poder, el quién controla el Estado y la economía y para beneficio de quién. Hasta que llegue ese momento, un adormecido país será forzado a continuar contando, un día tras otro, sus muertos.